



**JUZGADO CUARENTA Y UNO (41) LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

j41ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023).

ACCIÓN DE TUTELA promovida por **YENI MARITZA LANDAETA ESPINOSA** y el señor **GILBERTO LANDAETA ESPINOSA** contra la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT**.

ANTECEDENTES

Los señores **YENI MARITZA LANDAETA ESPINOSA** y el señor **GILBERTO LANDAETA ESPINOSA**, mediante apoderado judicial, presentaron acción de tutela con la finalidad de que se ampare sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y acceso a la tierra y el de la población campesina y rural, en consecuencia, solicita se ordene a la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT**. Proceda a gestionar los asuntos internos que tengan pendientes y a notificar la resolución mediante la cual se hace la adjudicación del predio.

TRÁMITE PROCESAL

La acción de tutela correspondió por reparto a este Despacho el día 7 de junio de 2023, a continuación, mediante proveído del mismo día se admitió en contra de la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT**. Así mismo, se vinculó al **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, de igual manera se reconoció personería jurídica al Doctor **ÓSCAR LUÍS SARMIENTO RUSSI**, se requirió para que, en el término de 1 día, aportara al Despacho el ultimo derecho de petición realizado a la accionada **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT**, así como, copia de la resolución 8584 del 14 de noviembre de 2018. Por otro lado, se ordenó la notificación de la accionada y la vinculada, para que en el término de dos (2) días presenten el informe previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, y se pronuncien acerca de los hechos que dan origen a la presente acción, en la forma en que estime conducente.

El apoderado judicial **ÓSCAR LUÍS SARMIENTO RUSSI**, guardo silencio frente al requerimiento efectuado por el Despacho.

Exp (04ConstanciaNotificacionAutoAdmisorio)

Por su parte, la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT** rindió informe en termino mediante correo electrónico, indicando que; a través de memorando el 08 de junio de 2023, la Subdirección competente informó a través de oficio de interno No. 20232200181183, se pronunció sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela incoada por el accionante de la siguiente manera:

*“Damos respuesta al memorando del asunto, teniendo en cuenta las pretensiones elevadas mediante la acción de tutela, admitida por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá - Cundinamarca, mediante la cual el señor **OSCAR LUIS SARMIENTO RUSSI**, solicitó el amparo a los derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, acceso a la tierra y el de población campesina rural, solicitando información respecto de trámites de adjudicación, inscritos mediante el diligenciamiento de los Formularios:*

ACCIONANTES	No. FISO
YENY MARITZA LANDAETA ESPINOSA	FISO PN- 0148285
GILBERTO LANDAETA ESPINOSA	FISO PN -0148524

Sobre el particular, se manifiesta que la información solicitada por los accionantes, está relacionada con tramites de adjudicación en el marco de la Ley 160 de 1994 y se identifican con los expedientes y memorandos de traslado por competencia a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, relacionados a continuación:

ACCIONANTES	EXPEDIENTE	NÚMERO DE MEMORANDO DE TRASLADO
YENY MARITZA LANDAETA ESPINOSA	202122010699819498E	20232200181113
GILBERTO LANDAETA ESPINOSA	202122010699822521E	20222200233233

Por último, se señala, que verificado el Sistema de Gestión Documental Orfeo de la ANT, no se registran peticiones pendientes de respuesta a cargo de los accionantes ni del apoderado judicial.” (negrilla fuera de texto)

Concluye su informe la Agencia Nacional De Tierras – ANT alegando que no han vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, pues se configura la inexistencia de hecho vulnerado toda vez que la misional se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela, indicando que los trámites de adjudicación presentado por los accionantes se encuentran en el marco de la Ley 160 de 1994 y se identifican con los expedientes No. 202122010699819498E y No. 202122010699822521E, expedientes que fueron trasladados a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas para continuar con dicho proceso

administrativo, igualmente informa la subdirección que una vez consultado el sistema de Gestión Documental Orfeo de la ANT, no se registran peticiones pendientes de respuesta a cargo de los accionantes ni del apoderado judicial, finalmente solicitó se niegue la acción constitucional de tutela por inexistencia de vulneración al derecho fundamental invocado.

Por su parte, el **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, pese a ser notificado en debida forma, guardo silencio frente a la Acción Constitucional de Tutela Exp digital (04ConstanciaNotificacionAutoAdmisorio)

CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es procedente para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de una persona, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos expresamente señalados por el inciso final de este precepto.

No puede, entonces tratarse la acción de amparo como una instancia adicional, alternativa o complementaria de las acciones ordinarias y especiales previstas por la Constitución y la Ley para la defensa de los derechos.

Puestas, así las cosas, corresponde este Despacho determinar si se ha vulnerado el derecho fundamental de petición, igualdad, debido proceso y acceso a la tierra y el de la población campesina y rural alegados por la parte actora a fin de que se ordene a la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT**. que Proceda a gestionar los asuntos internos que tengan pendientes y a notificar la resolución mediante la cual se hace la adjudicación del predio.

Puestas, así las cosas, vale la pena resaltar que la Honorable Corte Constitucional ha reiterado que no siempre el juez de tutela debe ser el primero en ser llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración.

Bajo estos parámetros la tutela constituye un medio eficaz para evitar la arbitrariedad de la administración pero en ningún momento puede constituirse en un mecanismo alternativo que supla las omisiones y el deber que tiene el accionante de cumplir con los procedimientos que han sido establecidos por la propia normatividad en procura de la satisfacción de los derechos que crea tener en su favor, pues al no aplicarse lo anterior, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y decisión de diferentes temas, y no de protección de los

derechos fundamentales; Al punto, la sentencia T-030 de 2015, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:

“La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria.”

Aunado a lo anterior, se debe recordar que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, tal es el caso de la sentencia 237 del 22 de junio de 2018 en la cual consideró lo siguiente:

“El requisito de subsidiariedad. La interposición oportuna de los recursos ordinarios y extraordinarios como condición previa para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, la acción de tutela constituye un mecanismo preferente y sumario de defensa judicial al cual puede acudir cualquier persona para asegurar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que defina la ley.

Atendiendo al diseño constitucional previsto en el artículo 86 Superior, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, lo que significa que su procedencia se encuentra condicionada a que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. En ese sentido, en principio, le corresponde al interesado agotar todos los medios judiciales ordinarios que tenga al alcance para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, como requisito previo para acudir al mecanismo de amparo constitucional.

No obstante, el mismo mandato constitucional, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto (numeral 1º) del Decreto 2591 de 1991, establece excepciones a dicha regla, en el sentido de considerar que la acción de tutela será procedente, aunque el afectado cuente con otro medio de defensa (i) cuando la misma se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o, (ii) cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo análisis, se pueda establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni eficaces para

superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.

En ese contexto, tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales, le corresponde al juez constitucional verificar de forma exhaustiva que la parte accionante agotó “(...) todos los medios – ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance (...)”, de manera que, solo es posible erigir la tutela como mecanismo principal, cuando el actor acredite la consumación de un perjuicio irremediable o se verifique la falta de idoneidad o eficacia de los recursos ordinarios de defensa; circunstancias que adquieren cierto grado de flexibilidad frente a sujetos de especial protección constitucional.

En la Sentencia C-590 de 2005, esta Corporación precisó que, en virtud del requisito de subsidiariedad, es “deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”, pues, de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”.

Al respecto, la misma jurisprudencia constitucional ha precisado que “(...) cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer, dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia (...)”.

Bajo esa misma línea, se ha hecho especial hincapié en que “La acción de tutela no puede admitirse, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”

En este orden de ideas, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad deviene en que el amparo constitucional resulte improcedente contra providencias judiciales cuando, entre otras cosas,

se utilice para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia T-032 de 2011, precisó lo siguiente:

*“Así, a la luz del principio de subsidiariedad, la acción de tutela no puede ser ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de los derechos. De hecho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, **a través de la acción de amparo no es admisible la pretensión orientada a revivir términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada del actor.** Igualmente, la jurisprudencia tampoco ha consentido el ejercicio de la acción de tutela como el último recurso de defensa judicial o como una instancia adicional para proteger los derechos presuntamente vulnerados”. (Subrayado fuera del texto).*

En el mismo sentido, esta Corporación ha establecido que “(...) es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios”.

Ahora bien, y para efectos de lo que ocupa la atención de la Sala, es preciso recordar que, en el escenario de la tutela contra providencias judiciales, este Tribunal ha sido claro en señalar que las reglas generales de procedencia de la acción de amparo deben seguirse con especial rigor. Lo anterior, so pena de desconocer no solo el principio la autonomía judicial, sino también, los principios de legalidad y del juez natural como elementos fundamentales de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En suma, de la aplicación del requisito de subsidiariedad surgen las siguientes conclusiones: (i) la acción de tutela no es un mecanismo judicial diseñado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni para reabrir procesos concluidos, ni revivir términos u

oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada. Ello, sin perjuicio de que, en cada caso, (ii) se verifique si acudir a los medios ordinarios o recursos comporta una carga desproporcionada para el actor, ya sea, por su falta de eficacia e idoneidad a la luz de las circunstancias particulares, o cuando se evidencie la existencia de un perjuicio irremediable y este sea alegado por la parte interesada.

Sobre esas bases, le corresponde al juez constitucional verificar con particular atención el cumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, para con ello, determinar la procedencia de las acciones de tutela que se interpongan contra decisiones judiciales.”

Descendiendo al caso de autos, del conjunto de pruebas que obran aportadas al plenario es palmario y sin discusión alguna que lo pretendido por la parte actora es que por este mecanismo constitucional subsidiario y residual se ordene a las accionadas proceda a gestionar los asuntos internos que tenga pendientes y a notificar la resolución mediante la cual se hace la adjudicación del predio a favor de los accionantes YENI MARITZA LANDAETA ESPINOSA y GILBERTO LANDAETA ESPINOSA, por lo que resalta este Despacho que el Juez de tutela no puede superponerse a mecanismos y procedimientos diseñados en la legislación a efectos de hacer prevalecer ciertos derechos, como es el caso que aquí nos ocupa, y que debe realizarse ante el AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT, a través del procedimiento de adjudicación Ley 160 de 1994.

Así mismo, observa esta instancia judicial que dentro del plenario se avizora que se requirió a la parte accionante, a fin de que allegara al escrito de tutela, el ultimo derecho de petición que aduce presento a la accionada AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT, así como, copia de la resolución 8584 del 14 de noviembre de 2018, y de la que, asevera haber interpuesto de manera oportuna los recursos de ley, requerimiento que a la fecha la parte actora no realizó.

De igual manera, y frente a la existencia de un, eventual, perjuicio inmediato e irremediable, considera el suscrito que la parte actora no aporta prueba alguna que permita inferir que se encuentre en un estado de indefensión o vulnerabilidad que pueda afectar de manera irreversible a los accionantes y requiera la intervención del Juez Constitucional, por cuanto la parte accionante no cumple con la carga de la prueba consagrada en el artículo 167 del CGP, tesis desarrollada por la Corte Constitucional en las sentencias T 298 de 1993, T-835 de 2000, y en la T 131 de 2007, en las cuales consideró lo siguiente:

“Siguiendo con esa misma línea jurisprudencial, la Corte en sentencia T-835 de 2000, en el caso de un trabajador, quien alegaba ser víctima de una discriminación en materia salarial en relación con sus compañeros,

negó el amparo solicitado por cuanto “Quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación”.

(...) En igual sentido, en sentencia T-237 de 2001, la Corte señaló lo siguiente:

“el directo afectado debe demostrar la afectación de su mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están quedando insatisfechas, para lograr la protección y garantía por vía de tutela, pues de no ser así, derechos de mayor entidad, como la vida y la dignidad humana se pueden ver afectados de manera irreparable.

“En este punto, es necesario enfatizar el hecho de que, no basta hacer una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación.”

En suma, quien instaure una acción de tutela por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones.”

Consecuente con lo anterior, es claro que en el presente asunto no es procedente la protección de los derechos fundamentales alegados por los accionantes, pues las documentales aportadas y requeridas por este Despacho, no se infiere que este pendiente derecho de petición por contestar por la accionada o que se hayan interpuestos los recursos contra resolución 8584 del 14 de noviembre de 2018 *“por medio de la cual se resuelve el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados respecto del predio denominado **GUADALAJARA...**”,* y máxime que la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT, en el escrito de contestación de tutela manifestó **“Por último, se señala, que verificado el Sistema de Gestión Documental Orfeo de la ANT, no se registran peticiones pendientes de respuesta a cargo de los accionantes ni del apoderado judicial.”** (negrillas fuera del texto), como se avizora en el Expediente digital (05RespuestaAgenciaNacionalTierras Fl 11). Lo que, a su turno, demuestra que no se han agotado los mecanismos de defensa establecidos en la ley, así como tampoco la inminente afectación a los derechos invocados, lo que conlleva a declarar improcedente la presente acción de tutela.

Así las cosas, del material probatorio recaudado, analizado a la luz del Decreto 2591 de 1991 y de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, concluye el Despacho que se debe declarar improcedente la presente acción de tutela.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CUARENTA Y UNO (41) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

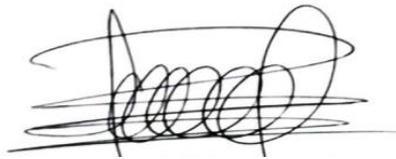
PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela impetrada por **YENI MARITZA LANDAETA ESPINOSA** y el señor **GILBERTO LANDAETA ESPINOSA** contra la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT.** por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR de la presente acción **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.**

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siempre y cuando la decisión aquí proferida no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS GERARDO NIVIA ORTEGA
Juez

**JUZGADO CUARENTA Y UNO LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

La providencia que antecede se notificó por Estado
N° 101 del 16 de junio de 2023.


LUZ ANGÉLICA VILLAMARÍN ROJAS
Secretaria